

Colaboración público-privada contra la caída de inversiones

MANUEL MIÑÉS MUÑOZ

DIRECTOR-GERENTE DE LA CÁMARA DE CONTRATISTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Las empresas contratistas de obra pública con intereses en las infraestructuras y concesiones tanto en la Comunidad Valenciana como en toda España reclaman tanto al próximo Gobierno autonómico como nacional salidos de las urnas más cooperación público-privada para resolver el grave problema que arrastramos en cuanto a la construcción y mantenimiento de carreteras (accesos a las ciudades desde áreas metropolitanas, y circunvalaciones de poblaciones), así como impulsar otras infraestructuras sociales prioritarias.

Los datos de inversión pública comparada de España con las otras cuatro grandes economías del euro revelan que nuestro país invierte por habitante un 20% menos que la media de Alemania, Reino Unido, Francia e Italia en infraestructuras de salud o un 45% menos en infraestructuras de protección del medio ambiente, según datos facilitados por Eurostat y la consultora internacional AT. Kearney.

Sin embargo, donde la brecha es mayor es en el apartado de infraestructuras para Educación, donde la inversión por habitante es un 62% inferior que la media, esto es, 34 euros por habitante frente a los 89 euros por habitante que destinan como media esos países.

Recordemos que, en la Comunidad Valenciana, tras los tres años y diez meses del Gobierno del Botà,ànic, todavía 37.000 escolares estudian en barracones.

Desde la Cámara de Contratistas llevamos años denunciando la caída del gasto público en infraestructuras, en un contexto en el que otras partidas de gasto público, como la de los costes de personal del Estado, paradójicamente, sí se han incrementado. Concretamente, la inversión en las distintas Administraciones Públicas entre 2007 y 2018 ha bajado un 60%, y en la Comunidad Valenciana –siempre líderes en maltrato– han disminuido hasta el 71%.

La consolidación fiscal y el Programa de Estabilidad 2019-2022 que la Ministra Nadia Calviño presentó en Bruselas (CE) el 30 de abril, con unas previsiones de Déficit Público del 2%, una deuda del 96% del PIB y un crecimiento del 2'2%, supondrá un ajuste de gastos de unos 6.000 millones de euros, con una reducción de la inversión pública de 3.000 millones, situándola en niveles de mínimos históricos, llevándola al 2'1% del total del gasto.

Desde las entidades implicadas y con gran experiencia en las infraestructuras del transporte AEC (Asociación Española de la Carretera), ACEX (Asociación Empresas Conservación y Explotación de Infraestructuras), RACE (Real Automóvil de Es-

paña), SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de ámbito Nacional), se denuncia también la dejadez que están demostrando los últimos Gobiernos por el mantenimiento de infraestructuras clave para el país, como carreteras, puentes, túneles y viaductos algo esencial para la seguridad vial y disminución de la siniestralidad.

Siniestralidad que a nivel Comunidad Valenciana –nuevamente ‘líderes’– con 133 muertes de tráfico, alcanzamos un aumento del 47% sobre 2017 (el nacional fue del 4'05%).

En este mismo sentido, desde nuestro ámbito autonómico, venimos abogando por reforzar la colaboración público-privada para paliar los efectos de esa caída en mantenimiento y construcción de nuevas infraestructuras. Es el propio Secretario de Estado Pedro Saura, y el Secretario General de Infraestructuras, el alicantino Julián López Milla, quienes estiman el déficit en conservación en unos 7.200 millones de euros a nivel nacional. Y en la Comunidad Valenciana, desde la Cámara lo estimamos en unos 360 millones, solamente en las carreteras del Estado, y otros 390 en las dependientes de la Generalidad y las diputaciones.

Según nuestros cálculos, el nivel de inversión en España, hoy, es el equivalente al de hace 30 años, una situación que afecta como vemos a la conservación y a una degradación exponencial de nuestro patrimonio ferroviario y equipamientos públicos.

Lamentamos que la colaboración público-privada en la construcción y financiación de obras esté ausente desde 2012, a pesar de que en el mundo hay unos 80.000 millones de dólares con necesidad de ser invertidos en infraestructuras de titularidad pública que no están llegando a España, bien porque no hay proyectos viables sobre las mesas ministeriales y autonómicas, bien, y sobre todo, porque, los proyectos y actuaciones –tasa por uso y concesionales– factibles y prioritarios, requieren de una clara voluntad política y consenso entre los partidos para acometerlos y de una seguridad jurídica ajena a los cambios de gobierno/partido político. ¡El dinero huye de la inseguridad!

Una situación que desde el sector no se comprende, puesto que en un entorno de consolidación fiscal en el que la inversión en áreas como la salud, sanidad y atención social cada vez requieren más recursos, la colaboración público-privada debería ser una vía para compensar la caída de recursos. Por ello, es una de nuestras peticiones a los Gobiernos central y autonómico que han salido de las urnas el pasado 28 de abril, acometer sin prejuicios y con toda transparencia y rigor esta colaboración.



EE YAO